Nuevas obligaciones para las sociedades que actúan en Uruguay

● POR XIMENA CASURIAGA, ASOCIADA DEL ESTUDIO JURÍDICO SCELZA & MONTANO

En el marco de la transparencia fiscal internacional, a partir de 2012 Uruguay sancionó una serie de normas que obligan a determinadas entidades a proporcionar información sobre sus titulares y, más recientemente, sobre sus beneficiarios finales.

En 2012 se sancionó la ley 18 930 que obliga a las entidades con *participaciones al portador* a comunicar sus titulares al BCU, y desde 2014 se dispuso que quienes hubieren incumplido con tal obligación fueran disueltos de pleno derecho (ley 19 288).

En enero de este año se sancionó la ley 19 484 que, entre otras cosas, amplió la obligación de informar a aquellas entidades con *participaciones nominativas*, y dispuso la obligación de identificar/comunicar el *beneficiario final*. Esta norma fue reglamentada recientemente por el Decreto 166/2017.

¿Cuáles son estas obligaciones?

- Identificar al *beneficiario final* de las entidades que se dirán y a los titulares de *participaciones nominativas*.

- Comunicar esta información, así como las modificaciones que sucedan, al BCU.

- Llevar un libro con el registro de los *beneficiarios finales* y contar con documentación que respalde esa información.

- Conservar los registros por un plazo de cinco años.

¿Quiénes están obligados a comunicar?

- Las *entidades residentes*, que son aquellas constituidas de acuerdo con las leyes nacionales o en el extranjero pero que hayan culminado los trámites de redomiciliación en Uruguay. Por ejemplo: sociedades anónimas, sociedades y asociaciones agrarias, S.R.L., cooperativas, asociaciones civiles, entre otras.

También están obligadas las entidades en liquidación hasta tanto no hayan presentado clausura por cese de actividades ante la DGI y declarado: a) la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación de la totalidad de los activos; b) la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos representativos de participaciones patrimoniales; c) la identificación del liquidador o administrador.

- Las *entidades no residentes*, siempre y cuando: a) actúen en Uruguay mediante establecimiento permanente, o b) radiquen en Uruguay su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, o c) sean fondos de inversión o fideicomisos del exterior cuyos administradores o fiduciarios residan en territorio nacional, o d) titularidad de activos situados en territorio nacional de valor superior a 2 500 000 UI.

Hay entidades que están exceptuadas por la norma de identificar al beneficiario final (entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean de propiedad de sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio, fideicomisos y fondos de inversión supervisados por BCU, entre otras), o de presentar declaración jurada al BCU (sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus *beneficiarios finales*, cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas).

sicas, sociedades de hecho y sociedades civiles integradas exclusivamente por personas físicas, entre otros).

¿Quiénes son los *beneficiarios finales*?

Son las personas físicas que, directa o indirectamente, poseen como mínimo el 15 % del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejercen el control final sobre una entidad (persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica).

¿Cómo se comunica?

El BCU determinará los formularios para cumplir con la comunicación, los cuales deberán contar con firmas certificadas notarialmente y el escribano es el encargado de enviarlo al banco a través de firma electrónica avanzada.

¿Hay plazo?

Las obligaciones se encuentran vigentes desde enero de 2017.

Los obligados deberán comunicar al BCU dentro del plazo de 60 días corridos, contados a partir de:

-1/08/2017 para las entidades con *participaciones al portador*.

-1/05/2018 para las entidades con acciones *nominativas*, sociedades personales y demás entidades.

Las modificaciones posteriores deberán ser comunicadas dentro de los 30 o 90 días (en caso de *titulares o beneficiarios no residentes*) de efectuadas.

¿Quién puede acceder a esta información?

La información comunicada es de acceso restringido y podrá acceder a ella:

- La DGI siempre que lo solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva.

- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.

- El Poder Judicial por resolución fundada de las Sedes Penales o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.

- La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que lo solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación del ámbito de su competencia.

- Otros organismos, siempre que cuenten con autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos estén consignados en el Registro.

¿Quién controla el cumplimiento de las obligaciones?

El control está a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. También, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas conforme a la Ley del Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo — por ejemplo, los Escribanos— están obligados a exigir a sus clientes la documentación que acredita el cumplimiento ante el BCU.

¿Hay sanciones?

Sí, la norma dispone que las mul-

tas se graduarán según la dimensión económica de las entidades y la duración del incumplimiento.

– El incumplimiento en identificar y comunicar los *beneficiarios finales* o titulares y modificaciones, así como la no conservación de la documentación, podrá derivar en una multa de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención (USD 25 000 aproximadamente), y la no presentación de la Declaración Jurada al BCU determinará la suspensión del Certificado único de la DGI.

- Las entidades no podrán pagar utilidades ni distribuir dividendos, rescates, recesos a los titulares o beneficiarios. En caso de incumplimiento la multa máxima será el equivalente al monto distribuido indebidamente.

– El uso de formas sociales inadecuadas que induzcan a error sobre la identificación de los *beneficiarios finales* será castigado con una multa máxima de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención (USD 250 000 aproximadamente).

– Las entidades no podrán inscribir actos y negocios jurídicos en los registros, sin la acreditación de haber cumplido con la ley.